

Cuadernos del Sur

Año 18 - Nº 33

Mayo de 2002

NUEVAS DIRECCIONES

www.cuadernosdelsur.org.ar
editores@cuadernosdelsur.org.ar

Tierra
del  fuego

Que venga lo que nunca ha sido

Eduardo Lucita

Suele decirse que “cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano” es porque transformaciones profundas se están desarrollando en la sociedad y fundamentalmente en las cabezas y en las conciencias de las gentes.

En Argentina luego de un cuarto de siglo interminable, en que el terrorismo de estado primero, el chantaje inflacionario y la demonización del estado después colocaran al mercado y al dinero como la medida de valor de todos los valores, algo muy profundo se ha quebrado.

Los ciudadanos que, puestos en un brete por esa lógica del capital en su fase neoliberal, se habían refugiado en el individualismo y el consumo, en sus problemáticas personales, en sus avatares cotidianos, que prisioneros de la rutinización de sus vidas, de sus gestos y de sus actos parecían vivir en una suer-

te de presente permanente, con independencia de todo pasado y de la experiencia social que hay en ellos, de pronto han recuperado el centro de la escena política, han roto con la cotidianeidad y sus rutinas.

En la Argentina de estos días somos protagonistas y testigos directos de una situación excepcional. Los acontecimientos se han sucedido y se suceden aún con rapidez vertiginosa, con esa vertiginosidad que es propia de las grandes crisis y de esos momentos inigualables que quedan en la historia. Esta se desenvuelve por los surcos que ella misma se trazó: de la recesión a la depresión, a la improvisación económica y al caos político.

Esta excepcionalidad esta dada tanto por la profundidad y alcances de la crisis —económica/social/política—, sus interrelaciones con la crisis mundial y sus rasgos específicos, pro-





pios de nuestra formación social histórica, como por la dinámica que el movimiento social está imponiendo. Dinámi-

ca que por su prolongación en el tiempo, por su extensión geográfica, por los sujetos sociales involucrados y por las formas y contenidos del debate y organización que va asumiendo, no tiene precedentes en el país.

Es indudable que estos acontecimientos están emparentados con el movimiento antiglobalización que desde Seattle (1999) hasta Barcelona (2002), pasando por numerosas escalas intermedias y los Foros Social Mundiales de Porto Alegre, sobrepasa –como la propia globalización– las fronteras de los estados-nación para elevar sus protestas y denuncias. Sin embargo lo sucedido en nuestro país muestra, con relación al movimiento internacional, un rasgo diferencial: forma parte de ese movimiento pero tiene encarnadura social en los marcos de nuestro estado-nación; se levanta contra los efectos locales de la globalización del capital, pero lo hace en forma autónoma del estado y de las instituciones del régimen.

La potencialidad social desplegada en estos días y en estos tiempos pareciera señalar con angustia y esperanza que, si “otro mundo es posible”, otra Argentina es necesaria.

Los acontecimientos del 19, 20 y 28 de diciembre pasado, por su masividad y decisión desplegada en los enfrentamientos contra el régimen y sus instituciones, por la potencialidad social puesta en evidencia, tienen características inéditas. Fue en sus inicios un profundo ejercicio de resistencia, incluida la violencia colectiva, que en su desarrollo concluyó cuestionando el poder de mando y orden del estado.

Por primera vez en nuestra historia un gobierno elegido democráticamente no fue derrocado por un golpe de estado sino por la acción directa de las masas populares. A la par que se reivindicó la soberanía popular se puso en práctica concreta la revocabilidad del mandato, y luego se expulsó a un nuevo gobierno, que sólo duró días, que podría tener la legalidad formal del régimen –elegido en una Asamblea Legislativa amañada y controlada por el Partido Justicialista– pero que carecía totalmente de legitimidad.

No sólo se tumbaron dos gobiernos, ha sido todo el régimen de la democracia delegativa, sus instituciones, sus personeros, lo que fue rechazado e impugnado por ilegítimo.

Pero así como los acontecimien-

tos del 19 y 20 de diciembre son un punto de quiebre que sintetiza y proyecta toda la experiencia de lucha acumulada en años de enfrentamiento, este punto de quiebre también ha abierto una nueva situación política, donde los elementos a tener en cuenta son la profundidad de la crisis de la burguesía –su falta de orientación y su inestabilidad política– y la dinámica de movilización, de energía social liberada, que los hechos mismos han precipitado y que se recrea continuamente.

Cuatro aspectos se han combinado en esta situación general:

1) La continuidad de la crisis económica que se mantiene y se profundiza desde hace varios años, pero que ahora está siendo sometida a una fuerte y renovada presión imperialista. Tanto por los organismos financieros internacionales como por la administración republicana del presidente Bush que tiene una visión mucho más doméstica de los problemas internacionales, que ha aislado al país buscando evitar la expansión de la crisis a otros países de América Latina, pero que a más de 90 días de declarado el “default” no ha brindado ningún tipo de apoyo concreto.

2) La instalación de una nueva dinámica social de características asamblearias y de ejercicio de democracia directa que incluye la constitución de organismos de de-

bate y deliberación, plurales y profundamente democráticos, con permanencia en el tiempo, que prefiguran potenciales organismos de poder popular.

3) El derrumbe del régimen político de la democracia burguesa, el descrédito de toda forma de institucionalización y de representación tradicional que ha arrastrado a los grandes partidos del sistema.

4) Un crecimiento, relativo pero sostenido en el tiempo, de la influencia social de la izquierda. Esto se manifiesta en la recepción de sus propuestas, en su implantación social, en el crecimiento de su militancia, que fuera precedida por avances significativos en el plano electoral.

Esto exige una caracterización del momento y del período que se inicia –reflexión que no puede ser sino provisoria dada la velocidad de los acontecimientos en curso– para lo cual las viejas categorías y los antiguos modelos nos sirven como un punto de referencia pero no necesariamente nos permiten interpretar cabalmente la nueva situación en Argentina.



El contexto socio-económico

Si bien el modelo neoliberal se fue implantando desde hace más de un cuarto de siglo es en la década de los '90 cuando este avanza arrolladoramente transformando y polarizando fuertemente a nuestra sociedad.

La fuerte disputa al interior de las clases dominantes por la apropiación de la riqueza social, que fuera una de las características de todo el período anterior, se cierra en 1991. Es en torno al Plan de Convertibilidad que se logra disciplinar a las distintas fracciones de la burguesía que asumen así un programa común bajo la hegemonía del capital financiero. El centro de este programa, sobre el que se constituyera el bloque de clases dominantes, es un conjunto de políticas concretas –fijación del tipo de cambio, desregulación de los mercados,



rebaja de barreras arancelarias y para-arancelarias, reforma del estado –pero es la política de privatizaciones, que significó una enorme transferencia del patrimonio social acumulado durante décadas en el

sector público al capital privado, su eje articulador.

En tanto que la ofensiva generalizada y sostenida del capital sobre el trabajo –que sin solución de continuidad se desplegaba desde 1975– se consuma en este período imponiendo una relación de fuerzas absolutamente desfavorable a las clases subalternas.

Esto fue acompañado en el plano político por una suerte de alianza de “ricos y pobres” que legitimaba al régimen y otorgaba el necesario consenso en torno a la política y a la cultura dominante en el período.

Al cabo de una década la reestructuración productiva, la desindustrialización, la reforma del estado, la nueva inserción internacional del país dejaron como contrapartida altísimos niveles de desocupación y exclusión social, una profunda caída estructural de los salarios y niveles de pobreza no conocidos.

La lógica del modelo implantado implicaba la acumulación de capitales bajo un mecanismo de valorización financiera que generaba continuos excedentes de capital que se expatriaban al extranjero y como contrapartida requería el permanente acceso al mercado internacional de capitales, con lo que se generó un continuo endeudamiento público, absolutamente necesario para sostener la dinámica del modelo.¹

A mediados del '95 el modelo

comenzó a dar muestras de su debilitamiento y de haber perdido su capacidad para continuar con las transformaciones regresivas de la sociedad. El agotamiento de la política de privatizaciones y las cada vez mayores dificultades para acceder a los mercados internacionales de crédito jugaron un papel determinante. El bloque de clases dominante comenzó a resquebrajarse. Su contrapartida fue un reanimamiento de las luchas populares, que tuvo su momento particular en los inicios del '96 con el llamado Santiago y la aparición, a mediados de ese año, del movimiento "piquetero" en Cutral-Co y Plaza Huincul.

La curva de conflictos comienza así una lenta pero persistente recuperación. Sin embargo, sin dejar de considerar los conflictos sindicales tradicionales –incluidas las huelgas generales–, es necesario señalar que son otros los sujetos que llevan el peso de la protesta social: los trabajadores desocupados, formaciones territoriales, organismos de solidaridad, etc. La combinación de viejas y nuevas formas de lucha y organización esta así estrechamente relacionada con los cambios en las bases materiales en la sociedad.²

La reapertura de la crisis de hegemonía se expresó en toda su amplitud en el gobierno de la Alianza, que en muy pocos meses debió cambiar tres ministros de economía –que aún en el marco del modelo

neoliberal expresaban distintas fracciones del capital– y ha quedado totalmente expuesta en la crisis actual donde la disputa entre las fracciones del capital alcanzó tal virulencia que debilitó hasta el extremo al gobierno de De la Rúa y tiene al actual gobierno sometido a fuertes presiones y condicionamientos, que son la fuente de sus inconsis-



tencias, de sus marchas y contramarchas, y de las debilidades para darle un rumbo claro al país.

Es en el marco de esta disputa interburguesa, por la apropiación de la riqueza social y por dirimir qué fracción hegemoniza e impone la salida a la crisis, que ha hecho irrupción con fuerza propia el movimiento social.

Una nueva dinámica social

Ha sido la condensación de esta situación social insostenible, combinada con una fuerte presión imperialista y la disputa al interior del gran capital, la que precipitó la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre, su continuidad el 28 y la caída de dos gobiernos.³

Hartazgo, frente a una situación económica agobiante. *Desconfianza* frente a los partidos y las instituciones de la democracia delegativa. *Madurez* en la comprensión de que hay que tomar la resolución de los problemas en sus propias manos. *Autoorganización*. Son los rasgos que han desencadenado una nueva dinámica social, que expresa las vivencias y la experiencia acumuladas en la década.

Un gobierno impotente para hacer frente a la crisis, que para continuar con el pago de los servicios de la deuda externa recurrió a la inmovilización de los depósitos bancarios, a la parcial confiscación de los salarios de los trabajadores y a una obligada bancarización, concluyó cortando la cadena de pagos y haciendo que la moneda –el equivalente general de las mercancías– desapareciera del mercado paralizando prácticamente todas las actividades comerciales y financieras.⁴

La respuesta social no se hizo esperar: desde los distritos y regiones que muestran los índices de desocupación y de pobreza extrema más elevados, miles y miles de excluidos de la producción y del consumo rodearon las grandes cadenas de supermercados exigiendo comida, y donde no se la daban la tomaban por su propia cuenta. Grandes negocios de artículos para el hogar fueron también expropiados por la multitud, que a su vez había sido

saqueada durante décadas, y acciones de vandalismo, propias de cuando la acción social es desbordada a sí misma, se realizaron contra pequeños negocios, impulsados por sectores de la derecha más reaccionaria.

La declaración del estado de sitio y un discurso del presidente de la nación tan soberbio como carente de contenido, precipitó la reacción de los trabajadores y las capas medias. Esta fue masiva en la Capital Federal y el conurbano del Gran Buenos Aires, pero la reacción tuvo alcance nacional.

Haciendo sonar sus cacerolas, tíbicamente en la puerta de sus casas primero, en los principales cruces de calles luego y desplazándose por las grandes avenidas finalmente, una multitud de hombres y mujeres, trabajadores, amas de casa, estudiantes, jubilados, profesionales, pequeños empresarios –la ciudadanía en presencia– convergió sobre la más que emblemática Plaza de Mayo (tal vez entre 60 y 80.000 personas en la noche del 19 al 20 de diciembre).

Decenas de miles de personas exigieron la renuncia del ministro de economía primero, del presidente de la Nación después y finalmente “*Que se vayan todos, que no que ni uno solo*”, en clara alusión a las instituciones y a quienes las integran.

Las sedes de numerosos bancos, de empresas multinacionales, los

cajeros automáticos, las casas de numerosos políticos fueron, y continúan siendo, blancos de la angustia y la bronca de la multitud, en una actitud más que simbólica de los manifestantes.

Estas acciones se repitieron el 28 hasta expulsar a un nuevo gobierno, "elegido" por un contubernio de las cúpulas del Partido Justicialista, sin un programa burgués consistente y absolutamente rechazado por el pueblo.

La memoria social como sustento de la espontaneidad

Por la forma en que el movimiento social ha hecho irrupción y por la autonomía que el mismo mostró, han sido muchas las caracterizaciones que priorizan, cuando no le asignan un valor excluyente, al carácter espontáneo de los sucesos del 19 y 20 de diciembre pasado.

Por el contrario, desde otras perspectivas se pone el acento en la ausencia del "factor" conciente, en la falta de organicidad y direccionalidad del movimiento.

De una u otra forma el viejo debate entre lo "espontáneo" y lo "conciente" vuelve aquí a reproducirse, pero esta vez es en torno a acontecimientos que no tienen precedentes en el país, producto de la extraordinaria e inédita combinación de una crisis social y política prolongada con un extendido movimiento de autoorganización.

Sin embargo a poco que se profundice el análisis es posible comprobar que ambos componentes están presentes en los acontecimientos de diciembre y en el proceso posterior.

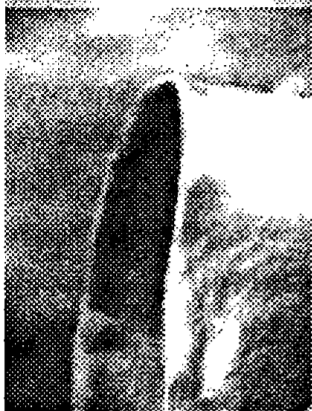
Es indudable que la espontaneidad esta dada por la originalidad del formato que adquirió la revuelta, por su autoconvocatoria, por que no reconoció consignas preestablecidas ni respondió a estructuras organizativas preexistentes, menos aún a direcciones reconocidas ni a liderazgos personales y tampoco fue expresión de una determinada clase social.

Pero no ha sido esta acción colectiva un rayo caído de un cielo sereno. La espontaneidad es siempre relativa. Las grandes crisis tienen la virtud de expresar en la coyuntura las contradicciones y las tensiones sociales que subyacen en una formación social determinada y que se van acumulando, a veces en largos períodos.

"Lo espontáneo" entonces nunca es puro, siempre alberga en su interior, aún embrionariamente, componentes de "lo conciente". Está allí presente la experiencia social acumulada, aún cuando de esto no resulten conscientes los propios protagonistas.⁵

Una multiplicidad de conflictos sociales, de acciones de rechazo al orden de cosas existente fue acumulando una profunda disconformi-

dad en todos estos años, que culminó en el 2001, que ha sido el año de mayor conflictividad social de la década. No solo de los trabajadores de-



socupados y excluidos, sino también de los trabajadores ocupados.⁶ La Huelga General del 13 de diciembre, convocada por las tres centrales

obreras, por su extensión y profundidad es un claro antecedente de los acontecimientos posteriores.

Las elecciones para renovación legislativa del 14 de octubre pasado marcaron un hito en esta disconformidad y rechazo al orden establecido: millones de abstenciones, de votos en blanco e impugnados, millones de votos perdidos por los grandes partidos del sistema, y una elección más que significativa por parte la izquierda fragmentada y dispersa, lo atestiguan.⁷

La Consulta Popular, organizada por un frente de organizaciones sociales y políticas, llevada a cabo del 14 al 17 de diciembre, con sus tres millones de votantes forma parte del clima de rechazo. Una adecuada lectura de la actitud de los votantes hubiera permitido entrever que quienes se acercaban a las urnas callejeras lo hacían por algo más que el Seguro de Empleo y Formación

por el que fue convocada la consulta.

La crisis de representatividad que desde hace años se venía expresando quedó así expuesta en toda su dimensión y se transformó en pérdida de legitimidad del régimen.

La combinación de estos hechos: incremento de la conflictividad social, pérdida de legitimidad del régimen y ejercicios de democracia directa se expresaron y dieron sustento “conciente” a la “espontaneidad” del 19, 20 y 28 de diciembre pasados.

Sin duda que las clases y su experiencia histórica han estado presentes en el movimiento, pero este no se identifica a priori con ninguna de ellas. Hay una suerte de corte transversal que atraviesa clases y fracciones, un conjunto social heterogéneo de trabajadores ocupados y desocupados, excluidos, sectores medios empobrecidos, pequeños comerciantes. Con un rasgo particular que es necesario subrayar: *fuerte protagonismo de mujeres y jóvenes.*

Es un dato que la clase obrera como tal estuvo ausente, que la actitud claudicante de las tres centrales obreras la privó de una participación organizada, y los trabajadores aparecen así diseminados y desdibujados en un movimiento general mucho más amplio, que está constituyendo un sujeto social de características inéditas.

Un sujeto complejo, contradictorio, con expresiones políticas e intereses muy variados, que se constituye en la acción y que se va redefiniendo en la práctica concreta.

Las masas en movimiento pasaron por sobre las organizaciones sociales y políticas que dicen representarlas, desafiaron a un estado que se mostró impotente para disciplinarlas, no obstante el alto costo en vidas humanas que se cobró, y por el cual sus responsables deberán ser juzgados y condenados.

Tamaño represión (35 muertos, 439 heridos, 3273 detenidos) solo pudo ser llevada a cabo sobre la base de un acuerdo político de los grandes partidos del sistema y estuvo destinada a impedir que en nuevas embestidas la gente ingresara por la fuerza en la Casa de Gobierno con las consecuencias políticas imaginables.

El desafío al estado de sitio, la reivindicación del "*Nunca Más*" co-reado por la multitud, contiene una profunda reivindicación democrática y afirmó el ejercicio concreto de la soberanía popular y la acción directa, rompiendo con las prácticas delegativas, sosteniendo ineludible del régimen democrático parlamentario.

La acción directa e independiente de las masas avanzó así con conocimiento de lo que no quiere, de lo que no acepta y rechaza, pero aún sin la conciencia de lo que efectivamente quiere. En un proceso de ma-

duración colectiva sacó conclusiones, encontró las formas y los medios y logró imponer la revocabilidad del mandato. Pero esta conclusión resultó inconclusa porque no tuvo los medios ni las posibilidades de imponer uno nuevo.

Dejó así un vacío que fue ocupado por los propios cuestionados que, con pocas y honrosas excepciones, son quienes se reunieron en la asamblea parlamentaria para resolver la sucesión presidencial. Pero es precisamente esta característica —denunciada con mucha fuerza y consenso social por el diputado nacional por Autodeterminación y Libertad (AyL) Luis Zamora en las dos asambleas legislativas— una de las fuentes de debilidad del nuevo gobierno.

Se expresó una crisis del régimen institucional de dominación pero los trabajadores y el conjunto de las clases populares no estaban en condiciones de disputar ese vacío de poder vacante.

Nuevos organismos de debate y deliberación

Estos límites y carencias no invalidan que se haya abierto una nueva situación política en el país. Desde hace más de tres meses un estado



asambleario permanente, una suerte de “continuum deliberativo”, se ha instalado en la sociedad. Iniciado en la misma noche del 20, se ha desenvuelto con epicentro en la Capital Federal para rápidamente difundirse al conurbano del Gran Buenos Aires y a las principales ciudades del país.

Los acontecimientos de diciembre liberaron una fuerza social acumulada durante más de una década, que una vez que se expresara centralizadamente en esos días se fragmentó en múltiples fracciones para tomar forma en cada una de las asambleas barriales, en un movimiento de características sinérgicas se vuelve a centralizarse –potenciándose– en cada una de las grandes movilizaciones.

Así el movimiento ha avanzado en la construcción de organismos autónomos de debate y deliberación, las *Asambleas Populares*, organizadas por barrio, y la *Asamblea de Coordinación Interbarrial*, que, superados los primeros momentos de catarsis colectiva, poco a poco va delineando una política y formulando propuestas para enfrentar la crisis.⁸

En los hechos las asambleas han puesto en cuestión los pilares en los que se asienta la constitución burguesa: “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, “el rol de los partidos políticos como instituciones funda-

mentales del sistema democrático”; cuestionaron “la irrevocabilidad de los jueces supremos”; instalaron la discusión sobre “la revocabilidad de los mandatos”, etc.⁹

Estos organismos de debate y deliberación, su incipiente coordinación centralizada, constituyen una verdadera experimentación de formas extraparlamentarias, no representativas en el sentido de la no delegación, que contienen una fuerte resistencia a toda forma de depositar confianza, sea en el estado, en las instituciones, en los partidos, en las organizaciones sociales tradicionales

Las asambleas discuten numerosas cuestiones que pueden catalogarse en cuatro agrupamientos:

a) *Procedimientos asamblearios*: criterios de organización y seguridad; formas de intervención en el debate; actividades concretas de gestión y movilización a desarrollar en la semana.

b) *Política de relaciones*: con otras Asambleas (coordinaciones zonales), con la Interbarrial, con las instituciones.

c) *Proposiciones políticas de nivel más general*: la cuestión de la deuda y de la banca; la confiscación de sueldos y de los ahorros; la desocupación, las remarcaciones de precios, el futuro de las empresas de servicios públicos privatizadas y sus tarifas; la presión de los EEUU, de

las grandes potencias y de los organismos financieros internacionales; el rol de los medios de comunicación, los políticos y la política, etc.

d) *Problemas locales (del barrio)*: administración y presupuesto de hospitales públicos; emprendimientos productivos; reconexión de servicios cortados; compras comunitarias, formas de solidaridad al interior de la comunidad barrial.

Junto con los acuerdos generales coexisten puntos de tensión que se manifiestan una y otra vez en las distintas convocatorias asamblearias. La preocupación por el mantenimiento de las formas plurales y democráticas, –que se expresa en la actitud de escuchar y querer ser escuchado– es acompañada por una disputa por instalar mecanismos que eviten cualquier tipo de tentación hegemónica por parte de los “militantes organizados” y de someterse a toda forma de dirección preestablecida.

Hay una reapropiación de los espacios públicos y una redefinición de los llamados “asuntos comunes” de la sociedad, que se expresa en el tratamiento de los problemas locales. Su ejecución resulta fundamental para afianzar al movimiento y preparar las condiciones para un salto cualitativo.(10) Sin embargo se corre el riesgo de llevar al movimiento asambleario a una posición minimalista, de gestión de su pro-

pia crisis, de empujarlo a integrarse a las instituciones que dice impugnar, de transformarlo en un sinnúmero de Juntas Vecinales. Quienes ponen el acento en la acción barrial se oponen a una perspectiva maximalista que se expresaría en la coordinadora Interbarrial, que si bien levanta propuestas programáticas aceptadas, muchas veces se plantea objetivos que superan el nivel de conciencia y de comprensión existente.

Se reconoce a la Asamblea Interbarrial, como espacio que permite centralizar e ir unificando las propuestas y socializando las experiencias, pero al mismo tiempo se es muy cuidadoso de que la centralización no vulnere la autonomía de las asambleas barriales.

En última instancia estos puntos de tensión no dejan de estar presentes en la consigna original y en cierta forma fundante del movimiento. “*Que se vayan todos, que no quede ni uno solo*”. Una y otra vez –luego de corearla en conjunto– las asambleas se indagan a sí mismas acerca del contenido de la consigna, de su significado, intuyen que es algo más que una expresión de rechazo a todo lo existente, a las formas institucionales y a los sujetos que las encarnan.

Esta indagación no es ajena a la segunda gran pregunta ¿Adónde van las asambleas?

Y la realidad es que el contenido

se está definiendo y el futuro se está construyendo.

Por eso es que lo que le da tanto vigor a la consigna, y permanencia a las asambleas, es que se trata de un proceso de maduración colectiva, de un verdadero laboratorio social donde cuenta más la imaginación que los conceptos preestablecidos, que se sustenta en una nueva sociabilidad, en la unidad de lo diverso, en el debate sobre las propuestas locales y las más generales y como interrelacionarlas.

Un proceso de búsqueda común que aun no se plantea el poder, pero lo cuestiona; que se organiza en forma autónoma del estado pero presiona sobre la instituciones; que intenta desarrollar formas autogestivas pero trata de no quedar encerrado en el barrio; que no dispone de un programa acabado pero sí de un conjunto de ideas que fluyen de la realidad impuesta por la propia crisis.

Ese programa, ausente desde el punto de vista de su formalización, está hoy en las calles, en las esquinas y en las plazas. Muchas de las propuestas de la izquierda que no mucho tiempo atrás eran cuando menos ignoradas, si no rechazadas, están hoy en debate y deliberación.

Se trata de un proceso que no reconoce jefaturas ni liderazgos, pero sí una innumerable cantidad de proto-dirigentes. De un proceso que está a la búsqueda de nuevas

formas de representación con la menor delegación posible, de nuevas relaciones entre representantes y representados (criterios de rotación, mecanismos de control, revocabilidades).

En síntesis se trata de la puesta en escena de la capacidad colectiva de pensar, de decidir y de hacer con autonomía y sin tutelas. Esta lógica estará de ahora en más en debate en las organizaciones políticas, sociales y sindicales.

El desafío de la convergencia

No obstante el movimiento debe resolver aún nuevos desafíos. En los años pasados numerosas luchas

se dieron al margen de las estructuras y los métodos tradicionales, con formas embrionarias de autoorganización y ejercicios de democracia y acción directas –en lo que constituye un claro antecedente a la situación actual– mientras que otras fueron encabezadas por las organizaciones sindi-



cales no comprometidas con el gobierno, en un proceso social de convergencia objetiva cuyo rasgo distintivo es el profundo contenido democratizador que recorre todo el movimiento.

El punto más alto de este proceso fueron los llamados "Congresos Piqueteros", que aparecieron como un centro político capaz de centralizar y orientar las luchas sociales. Sin embargo este proceso fue interrumpido tanto por la actitud de una fracción del movimiento piquetero que puso límites a la continuidad de los congresos, como por la CTA, la central alternativa, que no participó de las jornadas de lucha, que las descalificó, y que luego depositó confianza en los gobiernos surgidos de la crisis tirando por la borda todo un esfuerzo de construcción de una década.

Pero fue la propia crisis, pasando por encima de todas las formas preexistentes y poniendo en cuestión el discurso y las pro-



pias prácticas que de él se desprendían, la que favoreció la recomposición de una fracción social que es quien encabeza los cacerolazos y las asambleas barriales, en una nueva sociabilidad política.

La confluencia, en el marco de los nuevos organismos de debate y deliberación, del movimiento de las Asambleas Populares con el piquetero y el movimiento obrero como tal es entonces el gran desafío del momento.

Algunos pasos en esta dirección se han dado. La marcha a mediados de enero de una fracción piquetera (CCC y FTV-CTA) que por primera vez recibió el apoyo público de comerciantes y ciudadanos a su ingreso a la Capital Federal; el cacerolazo del viernes 15 de febrero que contó con la presencia del Bloque Piquetero y también por primera vez de una columna de la CTA; la "Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados" del 16 y 17 de febrero, convocada por el Bloque Piquetero y a la que fueron invitadas las Asambleas Populares, que en la Interbarrial votaron su asistencia. Esa misma tarde una delegación de la Asamblea Nacional se hizo presente en la Coordinadora Interbarrial para comunicar sus resoluciones, llevar su solidaridad y plantear acciones conjuntas. Finalmente la "Asamblea Nacional de Asambleas" del 17 de marzo fue un punto de encuentro superior

que abre nuevas instancias en este proceso.

En esta convergencia está la posibilidad de soldar la fractura entre la militancia social y la militancia política-partidaria que fue una de las características en la última década y al mismo tiempo de que este movimiento autónomo y profundamente democrático ponga límites al sectarismo de las políticas partidarias y de algunas organizaciones sociales. Unos y otras se empeñan con esfuerzos dignos de mejores objetivos en poner sus intereses de autoconstrucción por sobre las necesidades de construcción del movimiento.

El régimen político

La magnitud de la crisis abierta se muestra en que en apenas dos semanas pasaron cinco presidentes y que a más de dos meses de desatada la crisis política el país no tiene un rumbo claro y definido.

Esto ha impactado en la superestructura política nacional. Todo el esfuerzo del régimen en estos años por instalar un sistema de pluralismo político basado en el bipartidismo estalló en las elecciones de octubre pasado. Con la revuelta popular de diciembre las instituciones de la democracia representativa, los partidos y aun los sindicatos, han quedado convertidos en simples cascarones vaciados de contenido con escaso o ningún consenso en la sociedad.

Hay una crisis de dirección burguesa. Los partidos han perdido consenso y no alcanzan ya a expresar los intereses de sus representados y hay un profundo debilitamiento del sentido común en torno a la política y a la cultura dominante.

En tanto que las distintas fracciones del capital no logran aún reconstituir un bloque capaz de imponer una salida a la crisis. La clase dirigente mantiene el control del estado —a tal punto que ha producido una licuación de los pasivos de las grandes empresas y una brutal transferencia de recursos a favor de los grandes grupos económicos— pero ha perdido hegemonía en la sociedad. Para decirlo en términos gramscianos: solo se muestra como clase dominante.

Quienes han visto con absoluta claridad esta situación, y los peligros que encierra para la dominación burguesa, son los economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Dornbusch y Caballero, que descartan que la ayuda del FMI resuelva los problemas del país y proponen la intervención de un Comité Internacional para administrar las políticas fiscal, monetaria y tributaria.

Esta propuesta se apoya en un diagnóstico claro: "... es imposible llegar a un acuerdo nacional por que nadie cree en nadie y no hay grupo de poder que pueda confiar el timón a otro para salir de la crisis".

Es en este sentido que hay una suerte de crisis orgánica latente, pero todavía no hay una organización que alcance a expresar políticamente los intereses del conjunto de los explotados, oprimidos y excluidos por el capital. Así la crisis orgánica no logra consumarse.

La situación contiene enormes posibilidades pero también serios peligros. El fuerte grado de concentración del capital entra en contradicciones con el régimen democrático –en las actuales condiciones, aún con la más formal democracia representativa– y frente al desprestigio de los partidos y de las instituciones del régimen, se presentan condiciones para la aparición de figuras providenciales. Aunque por el momento nadie pareciera poder cumplir con ese rol...

El agotamiento del estado de bienestar nacional define, entre otras cosas, las enormes dificultades del régimen para neutralizar e integrar las demandas de los trabajadores y el conjunto de las clases subalternas. Es esto, más allá de corruptelas y prebendas, lo que está en la base del vaciamiento de las instituciones de la democracia representativa y, como contrapartida, la tendencia al autoritarismo del estado y su conversión en un estado policial si la dinámica social y la ingobernabilidad tienden a crecer...

Sin embargo la formidable movilización del 24 de marzo con moti-

vo de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, en que las Asambleas Populares tuvieron una presencia masiva, fue no solo un recordatorio del significado de aquella fecha sino, y sobre todo, una clara advertencia de la sociedad frente a todo intento de implantar cualquier forma de autoritarismo de estado.

Por otra parte el avance arrollador del neoliberalismo en los años '90 desarticuló las formas de mediación entre la sociedad civil y el estado. El movimiento, así, no encuentra canales institucionales, tiende a radicalizarse y a buscar por sí mismo las soluciones. Del interior del mismo surgen tendencias a conjurar las consecuencias disgregadoras del neoliberalismo, a resolver la fragmentación y la heterogeneidad.

Es un hecho que cada grupo o fracción de clase golpeado por la crisis avanza con sus propias demandas y reivindicaciones, sin embargo la crisis que sacude a nuestro país es de tal magnitud y profundidad que el destino de la nación está en juego. Para la mayoría de la gente, más allá de los problemas económicos y políticos, es una crisis de futuro. No alcanzan a percibir un horizonte que no sea el de un agravamiento del presente, de las actuales condiciones de fragmentación, empobrecimiento, exclusión social y sometimiento al gran capital nativo y extranjero.

Es esta noción de ausencia de futuro, el presentimiento de que las generaciones futuras estarán peor que la actual, la idea de que la nación misma está en juego y que la nación misma no es hoy otra cosa que el pueblo en acción –los explotados, los oprimidos, los excluidos–, el hilo conductor que está resolviendo la fragmentación, suturando el tejido social y dándole una direccionalidad al movimiento.

Es claro que no se trata de apelar al nacionalismo en un mundo globalizado, donde el período de expansión de los estados-nación ha concluido, sino de recuperar el concepto de nación como territorio común que pertenece a la colectividad de los hombres y mujeres que lo habitan.

La situación política creada a partir del 19 y 20 de diciembre pasado tiene una potencialidad excepcional apoyada en el estado deliberativo, en la autonomía social y la independencia política del movimiento en construcción. La izquierda organizada o no, en sus distintas variantes y fracciones, forma parte constitutiva de este movimiento y es la única expresión política que puede aportar ideas y propuestas con perspectiva de futuro. El resto no es otra cosa que el pasado.

No obstante el estado asambleario, la pluralidad de sujetos, el ejercicio democrático real, sintetizan

una situación política y social para la que la izquierda no estaba preparada y en este sentido la participación en las asambleas implica, también para nosotros, todo un ejercicio de aprendizaje.

Un dato no menor de la actual situación es la aparición de una nueva camada de militantes jóvenes junto con la recuperación de militantes de otras décadas que aportan su experiencia pero que en general coinciden en el rechazo a las estructuras partidarias y a la imposición de criterios decididos por fuera de los ámbitos de debate y deliberación.

Por primera vez en muchos años se insinúa un cambio en la relación de fuerzas sociales y se abre una situación excepcionalmente rica para las ideas y concepciones anticapitalistas.

Por esta vez la situación pareciera depender de nosotros, a condición de ser capaces de extraer las conclusiones necesarias del proceso en curso, si entendemos la importancia de intervenir en el movimiento volcando ideas para elevar el nivel del debate y la comprensión de los orígenes de la crisis, si aportamos argumentaciones que ayuden a señalar las contradicciones del capitalismo y la barbarie a la que nos está llevando.

Si somos capaces de preservar la autonomía y la independencia del

movimiento y hacerlo avanzar de conjunto hacia aquel objetivo que un graffiti pintado en las paredes de un tradicional barrio de la porteña Ciudad Autónoma de los Buenos Aires testimonia con todo orgullo: “*¡Que venga lo que nunca ha sido!*”.

Notas

¹ Bajo la presión de una deuda pública del orden de los 130.000 millones de dólares –equivalente a la totalidad del PBI anual al nuevo tipo de cambio– la economía se ha hundido en un ciclo de depresión y estancamiento luego de cuatro años continuados de recesión, y cuando las expectativas para el 2002 son como mínimo una caída del 8% del PBI, una inversión inexistente y una inflación esperada no inferior al 30%. Los efectos sociales de una década de neoliberalismo han llevado la desocupación actual al 23% de la PEA, y la subocupación superior al 20%, en tanto que la caída estructural de los salarios hace que el 50% de los asalariados gane menos de 400 pesos (160 dólares a una paridad de 2.50 pesos por dólar). La combinación de altas tasas de desocupación y fuerte caída salarial, hace que más de 15.000.000 de personas estén por debajo de la línea de pobreza, 480 pesos (192 dólares) y que cerca de 5.000.000 estén por debajo de la línea de indigencia, 140 pesos (56 dólares).

² Véase N.I. Carrera / M.C. Cotarelo / A. Piva / E. Lucita: “Protesta Social: Viejas y nuevas formas de lucha”, en *Cuadernos del Sur* n° 32, noviembre 2001

³ Esta sección es tributaria de la declaración de los *Militantes Socialistas* de diciembre 2001.

⁴ La desaparición del circulante y la ruptura de la cadena de pagos impactó fuertemente sobre la llamada economía “no registrada” (en

negro), lo que dejó sin sus paupérrimos ingresos a miles y miles de personas que viven de la recolección de desechos reciclables, particularmente los llamados “cartoneros” que cobran a razón de \$4 los 100 kilos de cartón. Buena parte de los saqueos –expropiación de alimentos– estuvo impulsada por esta situación.

⁵ Las puebladas de Cutral-Co y Tartagal que dieran origen al movimiento “piquetero” con sus asambleas multitudinarias sobre las rutas, que se repitieron una y otra vez en La Matanza, son un claro antecedente del actual estado asambleario. Más en los inicios de la década pueden rastrearse también antecedentes en el conflicto ferroviario de los años 1990-92. Ver “La huelga que dirigieron las bases”, en E. Lucita (comp.): *La patria en el riel. Un siglo de luchas de los trabajadores ferroviarios*, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires 1999.

⁶ En el período 85/89 los conflictos obreros fueron en promedio 715 por año; en 90/94: 444; en 95/00: 266, el total de conflictos laborales en el 2001: 1006, con una recuperación de los conflictos en el sector privado que en el total anual superan levemente a los del sector público. Los cortes de rutas muestran la siguiente evolución: 1997: 14; 98: 51; 99: 252; 2000: 514; primeros nueve meses del 2001: 996. Fuente: *Informe de Coyuntura Laboral* – SET Consultores y Centro de Estudios Nueva Mayoría.

⁷ Ausentismo: 26.3% (6.540.000); blancos e impugnados: 21.1% (3.871.000); votos a la izquierda tomados en conjunto: 6% (1.500.000). La Alianza gobernante perdió casi 5.500.000 de votos; en tanto que el Partido Justicialista 1.200.000. Para un análisis detallado véase A. Bonnet “Elecciones 2001: nadie vota a nadie” en *Cuadernos del Sur* n° 32, noviembre 2001.

⁸ Si bien no se cuenta con una enumeración taxativa, promediando el mes de marzo se estima que en Capital Federal funcionan unas 77 Asambleas Populares; 52 en el Gran Buenos Aires; 40 en la provincia de Santa Fe y 20 en la de Córdoba, se conoce la existencia del movi-

miento en el resto del país pero no hay aun precisiones cuantitativas. En la Capital Federal las asambleas funcionan con una reunión semanal, y otro día para las comisiones, con una asistencia mínima de 80 personas y un máximo que oscila entre las 120 y las 150.

⁹ Ver el artículo del senador por la UCR R. Terragno: "La revolución social ya tiene estatuto" en diario *Clarín* del 11-02-02.

¹⁰ La solución de problemas locales puede aportar a la reorganización de la vida social y a la recuperación de la cultura del trabajo, a semejanza como lo hace en el movimiento piquetero. Claro que se trata de una cultura del trabajo sustentada en nuevas relaciones sociales, basadas en la solidaridad, en la cooperación mutua, en el reconocimiento de las capacidades y de las necesidades concretas de cada uno.

